

R.I.T. : N° 61-2021  
R.U.C. : N°1900009547-0  
Delito : Tenencia ilegal de municiones.  
Acusado : Luciano Alfonso Reyes Berrios.

Melipilla, a cuatro de junio de dos mil veintiuno.

#### **VISTOS, OÍDOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, ante esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, presidida por don Gustavo Oscar Campaña González e integrada por doña Jessica Cofré Hidalgo y doña Camila Riquelme Cisterna, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en la causa **RUC N° 1900009547-0; RIT N° 61-2021**, seguida en contra de **Luciano Alfonso Reyes Berrios**, cédula nacional de identidad N°. 19.412.196-2, nacido en Melipilla el 27/12/1996, 24 años, soltero, pioneta, 3 medio rendido, sin apodo, domiciliado en HUILCO BAJO N° 1536, COMUNA DE MELIPILLA, representado legalmente por la Abogada Defensora Penal Pública **doña María Soledad Ávila Bravo**. Sostuvo la acusación la Fiscal adjunto **doña Verónica Monjes Vera**. Ambos intervinientes tienen su domicilio y forma de notificación registrados en el Tribunal.

**SEGUNDO:** Que, según figura en el auto de apertura, el Ministerio Público fundó su acusación en los siguientes hechos:

"El día 02 de enero de 2019, a las 17:00 horas aproximadamente, en la vía pública, específicamente en la intersección de Avenida Libertad con calle Gobernador Carlos Avilés, comuna de Melipilla, el acusado LUCIANO ALFONSO REYES BERRIOS fue sorprendido por funcionarios policiales conduciendo el vehículo PPU RS3339, en cuyo interior, tenía en su poder, sin contar con las autorizaciones legales correspondientes, 4 cartuchos de arma de fuego calibre 44 marca CBC."

Para la Fiscalía los hechos descritos son constitutivos de un delito de **Porte Ilegal De Municiones**, previsto y sancionado en el artículo 9 inciso 2 de la Ley 17.798, en grado de desarrollo consumado, correspondiéndole en éstos al acusado la calidad de autor de conformidad al artículo 15 número 1 del Código Penal.

A juicio del Ministerio Público, concurre la circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal consignada en el artículo 11 N°6 el Código Penal, esto es, irreprochable conducta anterior. Solicita se imponga al encartado la pena de **a la pena de 818 días de Presidio Menor en su grado medio**, más las accesorias legales correspondientes y la condenación expresa en costas.

**TERCERO:** Que en su alegato de apertura el Ministerio Público, indicó que este juicio versa sobre la tenencia de municiones por parte del acusado, esto surge de una fiscalización realizada el día 02 de enero de 2019, personal policial recibe una denuncia que indica que un sujeto que circulaba en un vehículo, detallándolo, con un arma de fuego, a raíz de lo anterior, carabineros cumplió con su obligación, fiscalizarlo y lo sorprenden con municiones al interior del vehículo. El imputado no cuenta con autorización de porte o tenencia de armas ni municiones. Esos son los hechos que se conocerán hoy. Pide la condena del acusado.

En la clausura, insistió en sus alegaciones.

No replicó.

**CUARTO:** Que la defensa en su alegato de apertura pidió la absolución de su presentado por vulneración de garantía y por insuficiencia de prueba. El procedimiento nace de una denuncia anónima, ese es el inicio, el cual – en su opinión- carece de inmediatez y ostensibilidad, tres personas denuncian a carabineros que el conductor de un auto Nissan rojo con negro conducía con

un arma de fuego, a la vez que no había respetado un signo PARE. Los denunciantes no fueron identificados y no declararon en el juicio, carabineros nunca perdió de vista el móvil y no vieron que el conductor se haya desecho del arma, la que tampoco fue encontrada. No hay indicio suficiente para un control del artículo 85. Si se trata de una fiscalización de la ley de tránsito, su representado no portaba licencia de conducir, ni los documentos del móvil, este control no habilita el registro del móvil. Si es un control preventivo del artículo 12 de la ley 20.931, este procedimiento es sólo para efecto de determinación de la identidad y, tampoco faculta para el registro del móvil. Hay en ambos casos infracción de garantías constitucionales al debido proceso, la libre circulación, la libertad y otros. La policía tenía esta información no corroborada, es una actividad engañosa, además el acusado fue interrogado por carabineros sin tener facultad para ello. Cuando hacen el registro del vehículo encontraron en el maletero en el bolsillo de una chaqueta y su representado fue interrogado de la procedencia de las municiones incautadas, lo que no procede porque se vulnera el principio de autoincriminación.

No se podrá acreditar que las municiones pertenecían a su representado, no las portaba, no estaba en posesión de ellas, no las tenía en ninguna de sus vestimentas que usaba, el sólo conducía el vehículo y no es propietario de lo que había el vehículo. Se acreditará que el móvil pertenece a Marcelo Andrés Valenzuela Caro, quien no declarará en juicio.

En la clausura, mantuvo su pretensión.

No replicó.

**QUINTO: Declaración del acusado.** Que en la oportunidad prevista en el artículo 326 del Código Procesal Penal, el acusado hizo uso de su derecho a guardar silencio.

En la ocasión en el artículo 338 del Código Procesal Penal, el acusado nada dijo.

**SEXTO: Convenciones probatorias.** Que en el auto de apertura consta que no se arribaron a convenciones probatorias de ninguna naturaleza por parte de los intervinientes.

**SÉPTIMO: Prueba rendida en el juicio.** Que el Ministerio Público, a fin de acreditar el sustento fáctico de su rindió las siguientes probanzas:

**Testimonial:**

**1.- Harold Alexis Muñoz Saldaña**, cedula nacional de identidad N° 18.867.724-k, nacido en Victoria el 03/03/1990, cabo 2° de carabineros de la 24° Comisaría de Melipilla, domiciliado en calle Ortúzar N° 674, comuna de Melipilla;

**2.- Víctor Edgardo Archigur Saravia**, cédula nacional de identidad N°18.965.155-4, nacido en Cañete el 24/01/95, cabo 2° de carabineros de la 24° Comisaría de Melipilla, domiciliado en calle Ortúzar N° 674, comuna de Melipilla

**Pericial:**

**1.- Ernesto Bernardo Alecoy Velozo**, cédula nacional de identidad N°15.228.724-0, nacido en Traiguén el 20/08/1980, perito balístico, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, domiciliado en Maule n° 40, comuna de Santiago, quien depondrá sobre el contenido, pericias realizadas resultado y conclusiones al tenor del informe pericial balístico N° 3145-2019, emitido por LABOCAR con fecha 24 de junio de 2019.

Se deja constancia que el detalle integro de lo declarado por los testigos y perito, ha quedado registrado en el audio respectivo. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto por el legislador procesal penal, en los artículos 39 a 44 del código de la materia. De modo que, si resulta

preciso, determinar qué dijo exactamente cada testigo, deberá recurrirse al soporte informático respectivo, en donde quedó almacenado y registrado el referido audio. Registro que está a disposición de los intervinientes y del público en general, conforme a la normativa indicada.

**Documental:**

1.- Certificado emitido por Autoridad Fiscalizadora Melipilla de la Dirección General de Movilización Nacional referido al acusado LUCIANO ALFONSO REYES BERRIOS que da cuenta de que no mantiene permiso de porte y/o transporte de armas ni municiones.

**Otros medios de prueba y prueba material:**

1.- NUE 3967968 consistente en 04 Proyectiles.

2.- NUE 3967968 consistente en 04 Vainas.

3.- Set fotográfico compuesto por 08 imágenes que dan cuenta de vehículo conducido por el acusado y de municiones encontradas en su poder.

**OCTAVO: Prueba de la defensa.** Que la defensa adhirió a la prueba del persecutor y no presentó prueba propia.

**NOVENO: Hecho acreditado.** Que, con la prueba reseñada en el considerando precedente, la que se deja constancia fue incorporada válidamente en juicio, siguiendo las exigencias establecidas por el Código Procesal Penal, el tribunal pudo tener por acreditados, más allá de toda duda razonable, conforme lo establece el artículo 297 del Código Procesal Penal, los siguientes hechos:

“El 02 de enero de 2019, a las 17:00 horas aproximadamente, en la vía pública, específicamente en la intersección de Avenida Libertad con calle Gobernador Carlos Avilés, comuna de Melipilla, Luciano Alfonso Reyes Berrios fue sorprendido por funcionarios policiales conduciendo el vehículo PPU RS-3339, en cuyo interior tenía 4 cartuchos de arma de fuego calibre .44 marca CBC, sin contar con las autorizaciones legales”

**DÉCIMO: Análisis de la Prueba de Cargo.** Que los presupuestos fácticos que se describieron precedentemente, referidos a la existencia del hecho punible, se acreditaron con la prueba de cargo.

Para que se configuren los delitos por los que se levantó acusación se requiere que una persona tenga municiones sin contar con las debidas autorizaciones legales.

La prueba de cargo resultó suficiente e idónea para establecer que los hechos se verificaron el día y hora propuestos en la acusación, junto con su dinámica, es decir, el 02 de enero de 2019, a las 17:00 horas aproximadamente, en la vía pública, específicamente en la intersección de Avenida Libertad con calle Gobernador Carlos Avilés, por así sostenerlo los testigos **Harold Alexis Muñoz Saldaña y Víctor Ignacio Archigur Saravia**, quienes precisaron que mientras realizaban un patrullaje preventivo en el vehículo policial RP4338, en calle Libertad en dirección al poniente y a la altura de calle Las Torres fueron detenidos por tres transeúntes, un hombre y dos mujeres, quienes los alertaron que el conductor de un vehículo Nissan negro con rojo que circulaba más adelante por la misma arteria a unos 400 metros, se había pasado un signo PARE, y lo hacía portando un arma. El funcionario Archigur afirmó que los denunciantes estaban visiblemente alterados. Ambos fueron concordantes en señalar que ante la denuncia salieron en persecución del móvil el que había tomado gran velocidad siempre en dirección al poniente, que lo mantuvieron a la vista a una distancia aproximada de 400 metros. Utilizaron la sirena y balizas logrando que se detuviera a un

costado de la calzada efectuando éste un viraje en dirección al oriente en la intersección de Libertad con calle Gobernador Carlos Avilés, procedieron a hacer un control de identidad, solicitándole al conductor su documentación y la del móvil, no portando éste ni su licencia de conducir ni los documentos del automóvil; realizaron un registro superficial de sus vestimentas, luego un registro del habitáculo del auto sin encontrar nada. A continuación, revisaron la maletera hallando una chaqueta y en uno de sus bolsillos 4 cartucho munición revólver .44 marca CBC. Al ser consultado por el hallazgo sólo refirió que era mecánico, encontrándose muy nervioso. Siendo detenido por el transporte de la munición y el vehículo Nissan color negro con rojo placa patente única RS-3339 fue retirado de circulación. Colocando los antecedentes en conocimiento de la fiscal de turno.

Ambos funcionarios explicaron que no les fue posible identificar a las personas que realizaron la denuncia porque como el vehículo los antecedió salieron en persecución de este para así evitar perderlo. Sin embargo, les advirtieron a las personas que se quedaran porque requerirían su identificación, estas se mostraron renuentes por temor a represalias. Al regresar ya no se encontraban en el lugar.

Afirmaron que el conductor estaba solo en el móvil, que no lo vieron portando un arma, tampoco encontraron una en el auto, ni lo observaron lanzar algo. Explicando que entre calle Las Torres y Carlos Avilés existe una curva donde solamente tuvieron visión de la parte trasera del vehículo.

Que los elementos incautados al sujeto detenido correspondían efectivamente a **4 cartuchos de arma de fuego calibre .44 marca CBC**, se probó a través de la declaración del perito criminalista y balístico **Ernesto Alecoy Velozo**, el cual arribó a dicha conclusión una vez realizados los análisis correspondientes, probanza que no fue desvirtuada por algún otro elemento de convicción.

Conforme a la declaración del perito antes mencionado, se le solicitó realizar el informe pericial de la evidencia incriminada correspondiente la NUE N° 3967968 que consistían en **4 cartuchos balísticos**. Realizado el análisis determinó que los cartuchos corresponden al calibre .44 son compatibles para ser utilizados con un arma de fuego del tipo revólver marca. Para corroborar su buen estado de conservación fueron sometidos a pruebas de disparados. Se remitieron cartucho para el registro IBIS.

En conclusión, las municiones periciadas corresponden a 4 cartuchos de arma de fuego calibre .44 marca CBC, las que se encontraban aptas para ser disparadas por arma de fuego del tipo revólver. Evidencias que fueron exhibidas en la audiencia al perito.

En lo referente a que la persona que mantenía en su poder **4 cartuchos de arma de fuego calibre .44 marca CBC,, corresponde al acusado**, se tiene por probada por la declaración de ambos testigos de cargo, quienes fueron contestes en señalar que el día de los hechos la persona que tenía las municiones a su disposición era Luciano Alfonso Reyes Berrios, circunstancia que les consta por haberlo observado.

En consecuencia, ha existido una imputación clara y directa por parte de los funcionarios policiales, quienes en esta oportunidad son testigos presenciales de que Reyes Berrios tenía a su disposición 4 cartuchos de arma de fuego calibre.44, marca CBC. Testigos que para la mayoría resultaron veraces, ya que, brindaron una explicación coherente y circunstanciada de los hechos, los

que por cierto resultan razonables en atención al contexto en el que se dio la detención y el levantamiento de la evidencia.

**En lo que respecta a la circunstancia de que el acusado tenía 4 cartuchos de arma de fuego calibre .44 marca CBC, sin contar con las autorizaciones correspondientes,** su acreditación se verificó sobre la base del Oficio de número 1595/12 de fecha 23 de enero de 2019, emitido por la Dirección General de Movilización Nacional, en el cual consta que Luciano Alfonso Reyes Berrios, no tiene armas inscritas y no registra permiso de porte y/o transporte de armas y /o municiones en la base de Datos de Dirección General de Movilización Nacional.

En consecuencia, es factible sostener que a la fecha de comisión del hecho el acusado no mantenía armas inscrita ni permiso de porte y/o tenencia de armas de fuego ni municiones.

En conclusión, en opinión de estas juezas, la prueba aportada por el ente persecutor ha sido coherente, consistente entre sí, exenta de contradicciones, permitiendo al tribunal dar por establecido más allá de toda duda razonable, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, los hechos referidos en el considerando que precede.

En efecto, la prueba testimonial rendida ha permitido a la mayoría del Tribunal arribar a tal conclusión, teniendo presente que los relatos de los testigos fueron contestes entre sí, estuvieron exentos de imprecisiones y no se apreciaron contradicciones, además dieron suficiente razón de sus dichos, y en ellos no se apreció alguna animadversión hacia el acusado, todo lo cual hace que sus expresiones sean consideradas veraces. Asimismo, esta prueba se vio corroborada con la documental incorporada en juicio la que ha permitido determinar la falta de autorización de tenencia y/o porte de municiones. Las fotografías, por su parte, contribuyeron a los testimonios brindados, dado que, en ellas se retrató las circunstancias descritas por los funcionarios, en lo concerniente al móvil que era conducido por el acusado, el lugar al interior de aquél donde encontraron las municiones. Por último, la prueba pericial permitió sostener que los elementos incautados en el procedimiento eran efectivamente municiones que se encuentran apta para ser percutidas por un arma de fuego.

En definitiva, la prueba de cargo ha tenido la entidad necesaria para acreditar la concurrencia del supuesto factico contenido en la acusación fiscal.

**UNDÉCIMO: Calificación Jurídica.** Que los hechos descritos en el considerando noveno son constitutivos de un delito consumado **delito de tenencia ilegal de municiones**, previstos en el artículo 9 con relación al artículo 2 letras c) ambos de la ley 17.798.

En efecto, para llegar a esta conclusión cabe considerar que en la especie se reunieron todos y cada uno de los elementos del tipo penal, se acreditó que un sujeto- el acusado- tenía **4 cartuchos de arma de fuego calibre .44 marca CBC**, sin contar con las autorizaciones correspondientes. Lo anterior, con razón de que esta figura delictiva establece como uno de sus verbos rectores “tener” lo que implica que, si bien el objeto material se halla bajo la esfera de resguardo del sujeto activo, éste no ejecuta actos que impliquen un control físico directo sobre las municiones.

**DUODÉCIMO: Participación del acusado.** Que la acusación fiscal atribuyó a **Luciano Alfonso Reyes Berrios** participación de autor, estimando que intervino de manera inmediata y directa en el hecho punible, imputación que es compartida por la mayoría de este Tribunal. En

efecto, en nuestra opinión, la prueba de cargo ha sido suficiente para probar la participación del encartado, la que se sustenta en la sindicación efectuada por los testigos de cargo, quienes lo reconocieron en estrados como la persona que se desempeñaba en la conducción del móvil Nissan de color rojo con negro el día de los hechos, precisando que lo hacía solo y en cuyo interior, específicamente en el bolsillo una chaqueta que estaba en la maletera tenía **4 cartuchos de arma de fuego calibre .44 marca CBC**, sin contar con las autorizaciones correspondientes.

En consecuencia, no existe duda para la mayoría acerca de la participación del acusado en calidad de autor de los ilícitos referidos en conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

**DÉCIMO TERCERO: Alegaciones de la defensa.** Que la defensa enarboló como teoría del caso, absolución por vulneración de garantías, indicando que el indicio para realizar un control del artículo 85 del Código Procesal Penal no eran tal, porque no era inmediato y carecía de ostensibilidad. También señaló que, si se trató de un control de la ley 18.290, éste no habilita al registro del móvil, lo mismo si fuese un control del artículo 12 de la ley 20.931. Que del mérito de la prueba rendida quedó claro que el control de identidad que realizaron los funcionarios fue aquel contemplado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, y no los otros argüidos por la defensa, por lo que, sus alegaciones tendientes a que no les está permitido a los funcionarios registrar el móvil no tienen asidero puesto que no nos encontramos en el escenario propuesto por la defensa.

Ahora bien, en lo concerniente al cuestionamiento formulado al control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, este tribunal debe analizar si los hechos y circunstancias apreciados por el agente policial justifican razonablemente la temporal restricción de la libertad personal de quien es sometido al control, de modo que con ello se descarte el uso arbitrario, antojadizo o discriminatorio de esta herramienta legal. A juicio de la mayoría de este Tribunal no ha existido vulneración de derechos del acusado, porque la norma en comento autoriza a los funcionarios policiales a realizar un control de identidad sin orden previa de los fiscales en casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que exista algún indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo. Que más fundado que una denuncia por un delito grave, no de uno sino de tres adultos, un hombre y dos mujeres, los que en palabras de los funcionarios se observaban alterados, respecto del conductor de un automóvil Nissan rojo con negro que transitaba en esos momentos por la vía pública- antecediendo a la patrulla por dos cuadras aproximadamente desde el lugar donde se encontraban los funcionarios acogiendo la denuncia- quien portaba un arma de fuego y se había saltado un signo PARE. Debiendo en ese contexto los funcionarios cumplir con las funciones que le son propias de prevención de la comisión de delitos en resguardo del orden público y la seguridad pública interior.

Tampoco, resta mérito al control efectuado que no se haya identificado a las personas que formularon la denuncia, porque las denuncias anónimas son aceptadas en nuestro ordenamiento, e incluso ampliamente difundidas y alentadas por las autoridades que tienen a cargo de la política criminal y la prevención del delito en nuestro país, existiendo incluso el programa "FONO DENUNCIA SEGURA".

El control de identidad en análisis si permite el registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, sin necesidad de nuevo indicio, por lo que, no



existe impedimento para que los funcionarios realizaran un registro del móvil incluyendo la cajuela y lo que se encontrará en ella.

El indicio a que se ha hecho referencia resultó fundado y suficiente para la actuación de los funcionarios policiales, de manera tal que su proceder en el desenvolvimiento de los hechos no merece reproche. Se trató del ejercicio de facultades para las cuales se encuentran dotados para resguardar el orden y seguridad públicas y en tal evento, controlaron la identidad de un sujeto, lo que culminó con el descubrimiento casual de un arma ubicada en el interior de vehículo, hallazgo realizado en presencia del imputado, conductor del referido vehículo. De conformidad a lo anterior ha de concluirse que no se ha vulnerado en el procedimiento policial ninguna de las disposiciones legales que reglamentan su actuación, ni transgresión de garantía constitucional alguna, pudiendo ser por ende valorada positivamente la prueba, como efectivamente se hizo, y servir de fundamento a la decisión.

En lo concerniente a la alegación de falta de propiedad del móvil y por ende de los objetos que en él se encontraban, se descarta porque el acusado era el conductor del móvil se encontraba solo en él, por lo tanto, las tenía a su disposición junto con todo lo que había en su interior.

**DÉCIMO CUARTO: Alegaciones para determinación de la pena y costas.** Que en la oportunidad prevista en el artículo 343 inciso 4° del Código Procesal Penal, comunicado el veredicto condenatorio, se abrió debate.

El persecutor penal indicó que al encartado le beneficiaba la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, por lo que en definitiva solicitó se condene a las penas contenidas en la acusación. Con relación a la forma de cumplimiento lo deja a criterio del tribunal.

La defensa pidió se reconociera la atenuante del artículo 11 N° 6, se impusiera la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio; sin costas por estar representado por la Defensoría Penal Pública.

**DÉCIMO QUINTO: En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad.** Que, **se acoge** la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, dado el reconocimiento efectuado en la acusación y lo expresado por el fiscal en la audiencia donde indicó que no existían anotaciones en el extracto de filiación del acusado.

**DÉCIMO SEXTO: Determinación de la pena.** Que el delito de tenencia ilegal de municiones se encuentra sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. Al momento de determinarse la cuantía de la pena a imponer debe atenderse a los criterios establecidos en el inciso 2 del artículo 17 b de la ley N° 17.798, en consecuencia, al existir una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, el tribunal fijará el quantum de la pena en la base de aquella asignada al injusto, considerando la extensión del mal causado, estimando que la pena que se impondrá es la más acorde al hecho y sus circunstancias y al principio de proporcionalidad que rige a la aplicación de las penas.

Que, asimismo, al tenor del artículo 15 de la ley ya citada, se ordena el comiso de los 4 cartuchos de arma de fuego calibre 44 marca CBC.

**DÉCIMO SÉPTIMO: Pena sustitutiva.** Que atendido lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 18.216, no se concederá al sentenciado pena sustitutiva.

**DÉCIMO OCTAVO: Costas.** Que no se condenará en costas al encausado por haber tenido representado por la Defensoría Penal Pública.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11 N° 6, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 24, 25, 30, 50, del Código Penal; 45, 47, 76, 285, 295, 297, 340, 341, 342, 343, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal, artículos 1, 2, 9, 15, 17 b de la ley 17.798 y ley 18.216, se declara que:

**I.- Se condena a Luciano Alfonso Reyes Berrios**, cédula nacional de identidad N°. 19.412.196-2, ya individualizado, a la pena de **541 días de presidio menor en su grado medio**, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor de un delito consumado tenencia ilegal de municiones, descrito y sancionado en el artículo 9, con relación al artículo 2 letra c) ambos de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, perpetrado el 02 de enero de 2019 en territorio jurisdiccional de este tribunal

**II.-** Que, no se concede al sentenciado ninguna pena sustitutiva, por lo que, deberá cumplir real y efectivamente la pena impuesta, sin que existan abonos que considerar, según se desprende del auto de apertura de juicio oral, salvo mejores antecedentes con los que cuente el juez de ejecución en su oportunidad.

**III.-** Que se decreta el comiso de los 4 cartuchos de arma de fuego calibre .44 marca CBC

**IV.-** Que no se condena en costas al sentenciado por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública.

Decisión adoptada con el voto en contra del Magistrado Sr. Campaña González, quien fue del parecer de dictar sentencia absolutoria, sobre la base de las siguientes dos líneas de argumentación, a saber, la existencia de un control de identidad sin indicio y la duda razonable en cuanto a la calidad y cantidad de la prueba incorporada en el juicio oral.

**PRIMERO:** Que, el control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, es un procedimiento policial autónomo que implica una restricción de libertad transitoria que sólo puede llevarse a cabo en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que la persona hubiere cometido o intentado cometer un crimen o simple delito o falta, o que se dispusiere a cometerlo, o de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta o que la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. De tal forma, y al quedar derogada la detención por sospecha, e instaurarse la presunción de inocencia, el legislador restringió esta diligencia a aquellos casos fundados en los cuales, a lo menos existe un indicio entendiendo por tal, según el Diccionario de la RAE “aquello que permite conocer o inferir la existencia de algo que no se percibe”, por lo tanto, para que estemos frente a un indicio en el sentido del artículo 85 del Código Procesal Penal, debe existir algún antecedente que le permita a la policía conocer o inferir que la persona cuyo control de identidad pretende, hubiere cometido o intentado cometer un crimen o simple delito o falta, o que se dispusiere a cometerlo, o que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta o que la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. A juicio, de este sentenciador, la existencia de una denuncia anónima [personas no identificadas que alertan a Carabineros de servicio en la población de un conductor que transitaría portando un arma de fuego], sumado a la falta de constatación o verificación de la existencia de los supuestos de básicos de la denuncia [detención y fiscalización del conductor sin hallar en su poder, es decir, ni en sus vestimentas ni cabina del vehículo que conducía un arma de fuego u otro objeto que tuviese la apariencia de tal], restó fundamento al procedimiento policial autónomo que continuó a dicha diligencia. Es decir, que a partir de la falta de corroboración de los supuestos básicos de la denuncia,



la actuación policial autónoma cesó; y debió darse paso a una investigación dirigida por el Ministerio Público [no se dio cuenta al fiscal de turno] y haber procedido a la realización de diligencias intrusivas y vulneradoras de las garantías fundamentales del acusado, a saber, al derecho al libre desplazamiento y a la garantía de inviolabilidad de la vida privada [registro o cateo], previa autorización judicial. Todo lo cual no ocurrió.

En efecto, verificado que el acusado no portaba un arma de fuego, como fue el contenido de la denuncia anónima, cualquier otra actividad investigativa conducente a hallar otras evidencias debió contar con la previa instrucción del Ministerio Público y con la correspondiente autorización judicial si se trataba de una diligencia que pudiera restringir o vulnerar los derechos constitucionales del acusado. Cuestión que no ocurrió por lo que se vulneró el principio contenido en el artículo 9 del Código Procesal Penal.

Consecuentemente, los antecedentes expresados no constituyen indicio alguno, en los términos exigidos en el artículo 85 del Código Procesal Penal, máxime cuando se trataría de una denuncia anónima en la que los hechos denunciados no fueron corroborados, ya que el acusado – que fue perseguido sin solución de continuidad y sin haber sido perdido de vista por los aprehensores – no fue hallado portando un arma de fuego, como lo señalaron los funcionarios policiales a cargo del procedimiento; quienes basaron, en buena medida, su decisión de realizar el control de identidad en tales afirmaciones, cuestión que no fueron verificadas. Entonces, agotada, la verificación de los hechos denunciados carecía de fundamento el registro del vehículo fuera de la cabina del vehículo, ya que ambos carabineros señalaron que nunca perdieron de vista al acusado ni al vehículo, por lo que cómo podría durante la persecución, ocultar la munición incautada dentro de un bolsillo de una chaqueta, y bajo de una carpa. Evidentemente el análisis del indicio debe valorarse ex ante en base a los antecedentes que se tienen al momento de tomar la decisión de proceder conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal; y no en base a los hallazgos que con posterioridad obtenga la policía una vez que ya ha revisado el vehículo en cuestión (ex post), toda vez que, toda vez que la munición encontrada en un bolsillo de una chaqueta, oculta bajo una carpa y en el maletero, son elementos que la policía descubre con posterioridad a los hechos, de suerte que la restricción a la libertad que supone el control de identidad y la vulneración al derecho a la intimidad no se encuentra justificado y, por lo tanto, la evidencia que surge a partir de un procedimiento policial que derivó en espurio no debe fundamentar una sentencia condenatoria porque el tribunal no puede, conforme al principio de la integridad judicial hacerse cómplice de una vulneración de tales garantías.

Asimismo, quedó acreditado que se procedió a interrogarlo previamente a la lectura de sus derechos, lo que vulneró el derecho a no auto incriminarse.

**SEGUNDO:** Por otra parte, y sin perjuicio de lo ya dicho, este juzgador, ha estimado que aun cuando la prueba fuese estimada obtenida sin vulneración de garantías, la decisión debe ser absolutoria, toda vez que la misma no ha logrado vencer el estándar de convicción contenido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, acorde con el cual nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. En tal sentido, y luego de rendida y analizada la prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal,

sin contradecir las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados, y existiendo dudas basadas en la razón, que surgen de la falta de prueba debe decidirse a favor del acusado, por cuanto una condena exige que el tribunal esté convencido tanto respecto de la comisión del hecho punible como de la participación que en él le ha cabido al acusado, esto último – a juicio de este juzgador – no se verificó, toda vez que, los dos funcionarios policiales que declararon en el juicio oral afirmaron que no vieron al acusado portando las municiones, sino estas fueron halladas en un bolsillo de una chaqueta oculta bajo una carpa y en el maletero de un vehículo que no le pertenecía al acusado, por lo que no puede presumirse la tenencia de esas especies por el solo hecho de estar conduciendo un automóvil ajeno; dicho de otro modo, no se acreditó por el ente persecutor el vínculo o relación entre el encartado, el automóvil, la chaqueta ni las municiones. De esta manera, el porte, que es por lo que se le acusó, no resultó acreditado, sobre todo cuando el carabinero Harold Muñoz, afirmó que las municiones no las portaba, sino que las transportaba el acusado en el maletero del vehículo que conducía.

Así las cosas, considerando que el encartado fue detenido de inmediato para evitar su huida, no es posible afirmar que el acusado tuviese la especie en su poder, ni siquiera la posibilidad de ocultarla en el lugar que se dice fueron halladas, máxime si se considera que de las fotografías incorporadas dan cuanta de una gran carpa o tela que cubría la totalidad del maletero, y que solo bajo esta se encontraba la chaqueta, y que en uno de sus bolsillos se mantenían cuatro cartuchos balísticos, lo que no permite establecer, más allá de toda duda razonable, la vinculación subjetiva ni material entre dichas municiones y el acusado. Considerando que, al interrogatorio policial previo a la detención y lectura de derechos, este respondió que era mecánico y que no era un delincuente.

No puede reprocharse al acusado; y por lo mismo no puede perjudicarle, el hecho de guardar silencio, el no haber explicado su relación con el vehículo, las evidencias y las circunstancias del hallazgo de las cuatro municiones incautadas, ya que es de cargo del ente persecutor acreditar dicha vinculación. De esa manera, la falta de explicación de la prueba de cargo, de la real vinculación de las evidencias con el acusado, quedan como cabos sueltos.

Además, la prueba incorporada tampoco permite tener por establecida la concurrencia del elemento subjetivo que requiere el delito, esto es, la intensión positiva de portar municiones, toda vez que, el acusado les señaló a los funcionarios policiales que “no era delincuente, que era mecánico; sumado, elementos de los cuales únicamente existe constancia por los dichos de los policías toda vez que las fotos incorporadas son, como se dijo de pésima calidad y no permiten apreciar estos elementos de juicio.

Así las cosas, la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la presunción de inocencia establecida en la ley, en la constitución y en los tratados internacionales, todo ello en virtud del principio del in dubio pro reo, como manifestación de la presunción de inocencia (María Inés Horvitz Lennon, Julián López Masle, Derecho Procesal Penal Chileno, Editorial Jurídica de Chile, Tomo I, páginas 81 y 82; Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, página 111; Julio Mayer, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Fundamentos, Tomo I, página 495).

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, dese cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 468 del Código Procesal Penal. Remítase los antecedentes necesarios al Juzgado de Garantía de Melipilla para la ejecución de las penas. Ofíciase a Arsenales de Guerra y a los organismos

pertinentes para el cumplimiento de lo resuelto. Y con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley N° 18.556, Ley Orgánica Constitucional Sobre Sistema De Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, modificado por la Ley N° 20.568 de 31 de enero de 2012.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Sentencia redactada por la Juez Titular doña Camila Riquelme Cisterna y el voto por su autor.

**RUC N°: 1900009547-0**

**RIT N°: 61-2021**

**Sentencia pronunciada por la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, integrada por los magistrados don Gustavo Campaña González, quien presidió, doña Jessica Cofré Hidalgo y doña Camila Riquelme Cisterna.**